

Prólogo a la segunda edición

La pregunta que motivó originalmente este ensayo —que escribí hace unos cuatro años, buscando librarme de cierta perplejidad— guarda relación con las ambigüedades de nuestra transición. En varios sentidos, esta había sido exitosa: Chile tuvo durante casi tres décadas crecimiento económico y estabilidad política en torno a instituciones democráticas, combinación extraña a lo largo de nuestra historia. Además, se había logrado llevar a cabo de manera pacífica una operación sumamente compleja, conducida por los mejores talentos de nuestra clase dirigente. Salir de una dictadura militar nunca ha sido simple, por más fácil que resulte hoy tomar distancia de las modalidades que esa salida adquirió en nuestro país. Sin embargo, esos innegables méritos tuvieron reversos menos amables, pues la transición también fue un régimen fundado en silencios, en acuerdos más o menos tácitos y pertinentes en su minuto, pero que, debiendo ser pasajeros, fueron perpetuándose. Dicho de otro modo, esos acuerdos tuvieron su sentido a principios de los noventa, pero perdieron valor, realidad y consistencia conforme pasaba el tiempo, sin que nuestros principales hombres públicos

se percataran. Muchos creyeron que la transición podía ser eterna, y en algunos casos esa ilusión sigue presente incluso hoy.

El año 2011, con ocasión de las movilizaciones estudiantiles, algunas de esas tensiones salieron a la superficie. Allí se hizo patente que el orden de la transición tenía dificultades profundas y que carecía de herramientas para procesarlas. Y allí quedaron, como señuelos para un futuro que aún no termina, dos actitudes políticas que han persistido en el tiempo. Por un lado, el inmovilismo de buena parte de la derecha frente a una sociedad que no responde a sus esquemas preconcebidos y cuyas dinámicas nunca ha comprendido del todo. Obnubilada durante décadas por la primacía de la tecnocracia —¿cómo conjugar el aparente malestar con números positivos?—, la derecha nunca supo cómo responder preguntas que excedían su propio lenguaje.¹ Por otro lado, los líderes de la entonces oposición abjuraron, en un abrir y cerrar de ojos, de los veinte años de Concertación: aquella coalición, que durante años se jactó de ser la más exitosa de nuestra historia, quedó súbitamente huérfana. Los adultos sintieron una repentina vergüenza de lo que habían hecho y, aprovechando que ya no eran gobierno, abrazaron el lirismo de la juventud, embarcándose en un laberinto sin salida. No encontraron mejor modo de expiar sus pecados y superar sus frustraciones adolescentes. De allí en adelante, el centro de gravedad de la centroizquierda pasó de la socialdemocracia moderada a una izquierda impaciente que considera toda transacción política como un crimen moral. Me parece que esos dos hechos —perplejidad paralizante en la derecha, lirismo adolescente en la izquierda— siguen siendo los

¹ En palabras del diputado histórico de la UDI, Patricio Melero, «lo más duro ha sido constatar que el modelo en el cual creímos con tanta fe y convicción, de que era el más adecuado para generar el cambio y el paso de Chile al desarrollo, no fue asimilado ni entendido por el conjunto de la sociedad como el camino más adecuado» (*La Segunda*, 6 de diciembre de 2019). La palabra «fe», en este contexto, no tiene nada de casual, pues revela la naturaleza del problema: no primaba allí la observación atenta de la realidad, sino una creencia asumida como verdad dogmática.

dos aspectos fundamentales de nuestro escenario político. En otras palabras, los principales rasgos de nuestra escena política quedaron dibujados ese 2011.

Desde luego, todo esto adquirió una dimensión impensada a partir del 18 de octubre de 2019. Si la primera administración de Sebastián Piñera había sufrido con el movimiento estudiantil, esta vez la sacudida fue mucho más fuerte, y sus ingredientes, literalmente, explosivos. Por de pronto, emergió una violencia inédita que catalizó la expresión del malestar. Uno de los grandes misterios de nuestro octubre —que nos tomará tiempo develar— es el modo en que la brutal quema del metro gatilló la expresión de un descontento masivo e inorgánico, del que varios quisieron apropiarse pero que, al menos en sus manifestaciones iniciales, se resistió a cualquier intento de ese tipo. Por eso, hasta el día de hoy, es difícil identificar líderes del octubre chileno. Nadie encarnó la revuelta, y ese rasgo dificultó la tarea del gobierno. ¿Cómo hacerse cargo de algo cuya voz es difusa y que se resiste a cualquier principio de unidad? ¿Cómo lidiar con aquello que se niega a ser leído?²

Si lo anterior es plausible, es ciertamente muy temprano para elaborar hipótesis demasiado ambiciosas sobre lo ocurrido en 2019, a pesar de que no faltan los esfuerzos por fijar un fenómeno móvil e indeterminado. En parte porque es un suceso aún en desarrollo, en parte porque carecemos de muchos elementos de comprensión, todo lo que pueda decirse tiene un carácter inevitablemente provisorio. Ignoramos el lugar que tendrá la violencia en lo que viene, y también las claves en torno a las cuales se reconstituirán las fuerzas políticas. No sabemos tampoco qué electorados se movilizarán en las próximas votaciones ni en qué medida nos afectará el escenario global, para no hablar de los

² Ver Lefort, Claude, «La question de la démocratie», en *Essais sur le politique* (París: Seuil, 1986), 17-32.

efectos sociales y económicos del Covid-19 en el mediano y largo plazo. No obstante, y aunque evidentemente cada lector podrá juzgar el mérito de esta afirmación, me parece que el diagnóstico central de este ensayo sigue siendo válido para dar cuenta de dificultades fundamentales de nuestro momento: la falta de discurso político. O, para decirlo de modo más preciso, la falta de pertinencia de nuestros discursos políticos. Octubre de 2019 hizo más patente que nunca que la palabra política dejó de tocar aquello a lo cual remite, dejó de acceder a la realidad perdiendo casi toda su consistencia. Los políticos hablan mucho, pero dicen poco, y sus palabras no logran conducir efectivamente los asuntos comunes. De hecho, como sugería más arriba, las dos actitudes políticas predominantes el 2011 continúan vigentes en esta crisis. Veamos.

A partir de lo ocurrido en octubre, la derecha ha tratado de salvar los (pocos) muebles que le quedan, pero parece constitutivamente imposibilitada de proyectar algo más. Esto no debería sorprender: al entregar la Constitución vigente sometiénola a un plebiscito, la derecha perdió su principal punto de referencia, su eje fundamental. Al mismo tiempo, su líder más relevante —que ganó dos elecciones presidenciales en ocho años, la segunda de ellas con una mayoría inédita para el sector— no ofreció mayores respuestas a la crisis. La Presidencia de la República debió marginarse para permitir que los partidos políticos concluyeran el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución del 15 de noviembre. El logro fue significativo, pero se pagó un alto costo: no es claro —según veremos— qué función jugará el primer mandatario en la salida de todo esto. Aunque hay esfuerzos por salir de este entuerto, un hecho macizo sigue ahí: la derecha ha intentado en dos ocasiones gobernar un país al que apenas conoce, con magros resultados. Para la historia quedará el primer gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera, de tecnocracia pura, como si el 2011 hubiera

sido una mala pesadilla por fin acabada. Los añorados años noventa quisieron regresar por medio de una vaga e inexplicada segunda transición, pero hoy sabemos cuán rebelde puede llegar a ser la realidad a ese tipo de elucubraciones.

La oposición, por su lado, continúa paralizada a partir de los problemas que no resolvió el 2011. Todas sus tensiones internas cristalizaron en el fallido intento de la Nueva Mayoría por remover los fundamentos del modelo, en la medida en que dicho esfuerzo nunca fue acompañado de un trabajo que le diera una traducción política efectiva y consistente. La Nueva Mayoría fue un engendro construido en torno a la popularidad de Michelle Bachelet, pero carente de proyección más allá de su persona. En política, las intuiciones deben ser seguidas de una labor de configuración de mayorías capaces de darles viabilidad y, en ese plano, Michelle Bachelet dejó poco y nada (si alguien tiene dudas, supongo que bastará recordar que el candidato de continuidad fue Alejandro Guillier, un hombre sin ideas ni trayectoria ni liderazgo interno). El motivo es relativamente simple: la centroizquierda nunca realizó un inventario sereno de la Concertación y, por lo mismo, se vio expuesta al fuego frenteamplista que sigue, hasta hoy, enrostrándole su supuesto entreguismo. Dado que la cuestión pasó al plano moral, los mejores jueces son aquellos que nunca han ejercido responsabilidades. La centroizquierda nunca ha sabido cómo responder frente a esa especie de chantaje político, y el problema tiene ribetes incluso psicológicos, en la medida en que muchos quedan literalmente pasmados frente a las extorsiones de los más duros. Eso explica también el enorme vacío que existe entre quienes condujeron a la Concertación y los dirigentes estudiantiles del 2011: hay una generación que, simplemente, nunca asumió del todo sus responsabilidades. La abdicación tiene sus costos.

Ahora bien, quizás el hecho de más largo alcance de todo lo señalado sea la pérdida de poder del presidente. Al llamar,

el martes 12 de noviembre, a las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo por una nueva Constitución, el primer mandatario entregó la iniciativa institucional al Congreso y a los partidos políticos. Ese gesto, creo, es tan decisivo como el mismo acuerdo del día 15. Sería un error leerlo como una concesión de Sebastián Piñera a los dirigentes de ese momento, pues hubo algo más profundo: fue una señal de sometimiento de la Presidencia de la República a las cúpulas partidarias. Por de pronto, no deberíamos olvidar el contexto: la tarde de ese martes 12 de noviembre fue un momento decisivo. El discurso del presidente —que muchos esperaban incendiario— logró aplacar los ánimos, dándole un cauce al movimiento: nunca, desde el retorno a la democracia, la legitimidad del Estado fue más frágil que en esos días. Con todo, nada quita que las palabras del primer mandatario hayan significado entregar las llaves del poder al Congreso, con todas las consecuencias asociadas.

Para comprender mejor el peso y la gravedad del gesto, es necesario situarlo en una perspectiva histórica más amplia. Después de todo, la pugna entre la presidencia y los partidos ha estado en el centro de nuestra historia desde los albores de la república. El trabajo de Portales, por ejemplo, fue el esfuerzo por situar al presidente por sobre las componendas de las facciones, por sobre aquello que Edwards llamó la «fronda aristocrática». En su lógica, el inquilino de La Moneda debía imponerse a las eternas divisiones oligárquicas, cuya mejor expresión se encontraba en el Parlamento. El fracaso del monttvarismo heredero de Portales fue una primera cesión, pues Manuel Montt no logró imponer (como era costumbre) a su sucesor natural, Antonio Varas. Se inició así un periodo de sucesivas reformas que irían disminuyendo poco a poco el poder presidencial. Luego, la guerra civil de 1891 sería el capítulo más cruento de esta pugna: un presidente decidido a reivindicar sus potestades a toda costa se enfrentó a un Congreso que buscaba imponer su

propia hegemonía. Después de la guerra, se instauró la República Parlamentaria, que dejó al presidente como figura más bien decorativa —estafermo y piedra de esquina, decía Isidoro Errázuriz—, cambio que no requirió de reforma constitucional. El siglo XX vio operar la misma dinámica. Arturo Alessandri intentó zanjar el problema a través de la Constitución de 1925, después de la crisis final del parlamentarismo oligárquico, que no pudo hacerse cargo de la grave cuestión social. Alessandri revivió el poder presidencial e intentó terminar con las eternas rotativas ministeriales, pero cabe recordar que solo pudo hacerlo con el respaldo más o menos explícito de los militares, pues los partidos no estaban de acuerdo.³ De hecho, apenas pudieron, estos volvieron por sus fueros e iniciaron una guerrilla de desgaste con el presidente. Como bien nota Mario Góngora, los partidos heredan el «frondismo» aristocrático.⁴ Cabe mencionar, por ejemplo, que el recordado Pedro Aguirre Cerda —ícono máximo del radicalismo y de la república mesocrática— se vio obligado a gobernar sin ministros radicales. La colectividad, en patriótico gesto, no daba el «pase» a sus militantes, intentando hacer presión sobre la conducción gubernativa. Más tarde, tanto Carlos Ibáñez como Jorge Alessandri ganaron sus respectivas elecciones con un discurso muy distante de las lógicas partidarias —basta recordar la célebre escoba de Ibáñez—. Jorge Alessandri, de hecho, presentó un proyecto de reforma constitucional en 1964 para reforzar la autoridad presidencial, pues consideraba que la obstrucción parlamentaria impedía un gobierno eficaz.

Se trata de una cuestión tan central en nuestra tradición institucional, que uno de los análisis más lúcidos de los factores internos de la caída de Salvador Allende, elaborado por un

³ Góngora, Mario, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX* (Santiago: Editorial Universitaria, 1986), 151.

⁴ *Ibid.*, 238.

intelectual proveniente de la izquierda, pone el énfasis en ella. Según Claudio Véliz, Allende no comprendió nunca el peso, la relevancia y el significado de la Presidencia de la República, provocando un desajuste que contribuyó al desenlace final. En otras palabras, Salvador Allende nunca se comportó a la altura del cargo que ejercía, y pagó un costo elevado en términos de prestigio —la tradición presidencial no se viola impunemente—. ⁵ Más tarde, y en impecable lógica pendular, la Constitución vigente buscó precisamente devolverle al presidente una primacía fuera de toda duda. La idea es que volviera a ser, al decir de Portales, «el principal resorte de la máquina», principio impersonal de una autoridad estatal robusta. ⁶ Con sus dificultades, la transición conservó este esquema y, de hecho, pocos presidentes han sido más presidentes en nuestra historia que Ricardo Lagos. Sin embargo, los partidos nunca se sintieron del todo cómodos con la situación, reclamando para sí un mayor protagonismo o quejándose de la excesiva preeminencia presidencial consagrada por la Carta Magna. La disminución del periodo presidencial a cuatro años (después de haber sido acortado desde ocho a seis) puede ser leída en esa clave: periodos cortos permiten darle más relevancia al Congreso, y van acotando el poder del primer mandatario.

Tal es el trasfondo del discurso presidencial del 12 de noviembre. Se trata de un primer mandatario que nunca habitó bien la función presidencial y que, finalmente, cedió frente a las dirigencias partidarias. Es, si se quiere, un cambio de régimen político que (aún) no dice su nombre y que constituye la antesala de cierto consenso que hace tiempo cruza a la clase política en

⁵ Claudio Véliz, «Continuidades y rupturas: otra hipótesis sobre la crisis chilena de 1973», *Estudios Públicos*, n° 12 (1983): 41-64 (el texto original es de 1981).

⁶ Carta de Diego Portales a Antonio Garfias, 14 de mayo de 1832, en *Epistolario Diego Portales*, tomo I (Santiago: Ediciones UDP, 2007), 270-271. Ver sobre esto Edwards, Alberto, *La fronda aristocrática en Chile* (Santiago: Editorial Universitaria, 2005), capítulo VII.

torno al régimen semipresidencial. La idea es que el gobierno sea responsable, de un modo u otro, frente al Parlamento, lo que constituye un dudoso intento por imitar el sistema francés.⁷ De hecho, la intención de muchos es reducir la figura presidencial a su mínima expresión. Por mencionar el ejemplo más significativo, Jaime Quintana, siendo presidente del Senado, le solicitó al primer mandatario aceptar un régimen parlamentario *de facto*; o sea, asumir explícitamente esta reducción sustantiva de poder.⁸ La mayoría de la oposición votó también favorablemente una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. La pandemia le brindó una oportunidad al gobierno de retomar el control del debate, pero esa ilusión se disipó al poco andar. De hecho, ocurrió más bien lo contrario. El Congreso siguió ganando espacio, y redujo la iniciativa exclusiva del primer mandatario. El corolario fue, sin duda, la reforma constitucional que autorizó el retiro de parte de los fondos previsionales. En esa discusión, el ejecutivo perdió el apoyo de tropas oficialistas, y ni siquiera logró el respaldo de un tercio del Congreso, que es la línea de flotación del régimen presidencial. En efecto, sin un tercio el

⁷ En efecto, el régimen semipresidencial tiene su principal (¿y único?) ejemplo en la Quinta República francesa. La Constitución de 1958 establece un régimen híbrido, donde el presidente acumula muchos poderes (incluyendo la disolución de la Cámara de Diputados), pero el primer ministro puede ser destituido por una mayoría parlamentaria. Esto tiene una explicación histórica. Al regresar al poder al calor de la guerra de Argelia en 1958, el general de Gaulle recibe el mandato de elaborar una nueva Constitución, pero bajo ciertos requisitos. Uno de ellos es que el gobierno debe ser responsable frente al Congreso (o sea, la preservación del sistema parlamentario). Si se quiere, el régimen semipresidencial es un traje hecho a la medida de Charles de Gaulle, que no estaba dispuesto a someterse al control de los partidos. Es más, a través de sucesivas reformas, el presidente ha ido reforzando su poder, hasta el punto de que una cohabitación (esto es, una situación en la que el presidente pertenece a un sector distinto que el primer ministro) es altamente improbable. Nada es menos seguro que ese dispositivo, tan atado a circunstancias singulares, pueda funcionar en nuestra realidad; y lo más probable es que —de instaurarse en el futuro— sea una forma más o menos solapada de imponer un régimen parlamentario. Habrá que ver si un presidente dotado de la legitimidad del sufragio universal estará dispuesto a someterse a esa lógica. Sobre este problema, ver el testimonio de Édouard Balladur, quien fuera primer ministro en el segundo mandato de François Mitterrand, en su libro *Le pouvoir ne se partage pas. Conversations avec François Mitterrand* (París: Fayard, 2009).

⁸ <https://www.t13.cl/noticia/politica/presidente-del-senado-si-pinera-quiere-seguir-debe-aceptar-parlamentarismo-facto>

presidente no puede recurrir al veto, ni tampoco protegerse de eventuales reformas constitucionales que busquen disminuir sus atribuciones.⁹ Así debe explicarse uno de los hechos más llamativos de los meses que siguen al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución: la creciente irrelevancia del gobierno, y particularmente del presidente. Aunque Sebastián Piñera ha realizado decenas de intervenciones desde entonces, ninguna de ellas ha logrado modificar la dirección de los sucesos, al menos no en la dirección que él hubiera deseado. Hace muchos decenios que en Chile un presidente no tenía tan pocos medios para influir sobre lo que ocurre, y ese es uno de los principales rasgos del momento que vivimos. Para decirlo en términos algo crudos, Sebastián Piñera entregó la primacía de la función presidencial, y nada indica que sus sucesores vayan a recuperarla con facilidad. Si esto es plausible, el presidente Piñera será recordado como aquel político bajo cuyo mandato se atrofió —quizás por mucho tiempo— el «principal resorte de la máquina». Estaremos entonces frente a una enorme paradoja: la revuelta más rabiosamente crítica de las élites que haya tenido lugar en Chile bien puede tener como gran resultado el traspaso de poder desde La Moneda hacia las oligarquías partidarias. Nadie sabe para quién trabaja, y Dios escribe con renglones torcidos.

Por cierto, estos factores históricos y políticos, que he intentado resumir de manera muy gruesa y esquemática, no agotan la explicación de nuestra crisis; son solo su dimensión más directamente visible o, si se quiere, su marco. Una consideración más acabada exigiría agregar otros aspectos y apreciar su interacción con este escenario, pues el punto común entre ellos es precisamente que la clase política no los ha logrado elaborar discursivamente, en razón de lo ya señalado (de allí que resulte dudoso que un cambio de régimen pueda ayudarnos

⁹ Ver *El federalista*, LXXIII

a superar la crisis: la clase política no está menos extraviada que el presidente). Un buen ejemplo es el papel de la violencia, que fue aceptada de modo más o menos tácito por parte de la izquierda, como respuesta a la supuesta violencia estructural del sistema. Se abrió así una puerta cuya dinámica es imposible de controlar: una vez que se ha aceptado el principio, se vuelve muy difícil establecer distinciones de peso entre los diversos tipos de violencia. Parte de la izquierda se sintió tentada de renunciar al *logos*, siguiendo una tendencia posmoderna que puede conducir fácilmente al nihilismo.¹⁰ Así, la llamada «primera línea» fue vista con romanticismo —heroicos y valientes luchadores—, el boicot a la PSU recibió sesudas explicaciones sociológicas, y el concepto de desobediencia civil fue distorsionado sin pudor. A esto se le debe sumar, naturalmente, el fracaso del Estado en prever, contener y controlar esa violencia, cuyos gérmenes son visibles hace tiempo (basta mencionar la situación que arrastran hace años el Instituto Nacional o las barras de fútbol). Un Estado que no es capaz de controlar la violencia —porque no tiene los medios, porque no tiene la legitimidad, porque no tiene la prestancia ni los sistemas de inteligencia— es un Estado que falla en unos de sus deberes más básicos. Esto no toca solo a la derecha, que defiende el orden público, sino también a la izquierda cuyo proyecto exige, como condición indispensable, un Estado operativo y en forma. Digamos que el sistema político en su conjunto ha carecido de respuesta razonable frente a esa violencia, pues la polarización lo ha afectado incluso en ese punto.

Ahora bien, si un número relevante de jóvenes está dispuesto a escoger la violencia, esto también nos obliga a preguntarnos por el horizonte vital que le hemos ofrecido a esa generación. Es posible, por ejemplo, que nuestra renuncia a transmitir virtudes y convicciones sustantivas haya jugado un papel significativo

¹⁰ Ver Leo Strauss, «German Nihilism», *Interpretation*, n° 26 (3), 1999: 353-378.

en el escaso apego que algunos sienten por la democracia, que nunca puede restringirse a un mero procedimiento. En ese sentido, otro aspecto fundamental de nuestra crisis son las tensiones no resueltas de la modernización. La peculiar e intensa introducción de mecanismos de mercado en nuestro país fue muy acelerada y tuvo efectos de largo alcance. Ese cambio de piel produjo tensiones, y supuso modificaciones en los modos de vida, en las prácticas sociales y en la manera de relacionarnos. Las antiguas coordenadas desaparecieron y no fueron reemplazadas por ningún esquema equivalente de sentido.¹¹ Además, el modelo no siempre cumplió sus promesas, y muchas piezas quedaron estáticas sin que el sistema tuviera la capacidad de rectificarlas. Piénsese, por ejemplo, en el modelo de pensiones: todos sabemos hace varios años que no cumpliría sus presagios iniciales, por una serie de motivos que sería largo detallar, pero el hecho es que se hizo poco por corregirlo. Al mismo tiempo, la clase dirigente suscribió, de manera más o menos consciente, a un ideal meritocrático que la escindió de la población: si los privilegios son merecidos y fruto exclusivo del propio esfuerzo (y solo de él), las élites pierden conexión moral con el resto, pues sienten que no tienen ningún deber respecto del todo social (este fenómeno fue estudiado, hace ya tiempo, por Christopher Lasch). Esto se puede apreciar con facilidad en la configuración física de muchas de nuestras ciudades, que no hacen posible algo tan elemental como el encuentro personal.

En cualquier caso, me parece que el problema central que subyace a las dificultades señaladas pasa por lo siguiente: en los años noventa, parte relevante de nuestra clase dirigente creyó, como si fuera una verdad revelada, en una teleología de la historia según la cual la modernidad era capaz de ajustar de modo más o menos espontáneo las dificultades que ella misma

¹¹ Ver Vial, Gonzalo, *Consensos y crisis social* (Santiago: Idea País, 2020).

iba induciendo (sobra decir que el Covid-19 constituye un abierto cuestionamiento a esa tesis: no es seguro que podamos controlarlo todo). La vulgata *fukuyamiana*, por darle un nombre, penetró los espíritus hasta el punto de que muchos dejaron de ver las tensiones de la modernidad, reduciendo la política al papel de mero administrador técnico de una lógica que la excede. Desde luego, aunque las hemos vivido con especial intensidad, ninguna de estas tensiones es exclusivamente criolla, y buena parte de ellas se viven en otras partes del mundo. Lo menos que puede decirse es que la democracia liberal enfrenta serios problemas a nivel global, hasta el punto de que una de las consecuencias de la actual pandemia bien podría ser la rehabilitación del viejo Estado nacional que tantos quisieron arrojar a los basureros de la historia.

Como fuere, abandonar la teleología de la historia no será tarea fácil, pues su lógica ha penetrado tanto en la derecha (a través de la primacía de la economía) como en la izquierda (asumiendo que un cambio en las estructuras producirá, al fin, la fraternidad entre los hombres: la idea es de Rousseau). Sin embargo, resulta indispensable devolverle a la política su contingencia, liberándola del peso de la necesidad, que le hace perder toda nobleza y dignidad. Si la política no es decisiva, al menos en algún sentido, no es nada. O, para decirlo de una manera distinta: si la función de la política es simplemente acompañar un movimiento inexorable, entonces todas nuestras discusiones son vanas. El progresismo filosófico (de cualquier signo) es sin duda el principal enemigo de la política, y de allí la importancia que este libro le atribuye al silencio: cuando la política no tiene nada que decir, es que se ha rendido frente a las sirenas de la Historia.

Suele decirse que las crisis son también oportunidades. La nuestra no es la excepción, sobre todo si consideramos que el régimen de la transición estaba, a todas luces, agotado. No

obstante, para abrir un nuevo ciclo son indispensables algunas disposiciones colectivas que hoy escasean. Al decir del viejo Aristóteles, hay que poner cosas en común, hay que recrear un espacio público en el que estemos todos embarcados y del que todos nos sintamos parte. En una palabra, requerimos actitudes como la que tuvo Patricio Aylwin a mediados de los años ochenta: su brillante operación consistió precisamente en generar un lugar común allí donde no había nada compartido. Su éxito, como todo en política, fue provisorio, pero no por eso menos real. Tener en mente su gesto, en su grandeza y en sus limitaciones —hoy, más visibles que nunca—, quizás nos resulte útil para salir del difícil atasco en el que estamos situados.¹²

Agosto de 2020

¹² El texto que aquí se presenta es el mismo de la primera edición, y solo se han corregido erratas y detalles menores. Aunque era tentador agregar algunas consideraciones (además de este breve prólogo) a la luz de la nueva situación, me pareció más pertinente no hacerlo, para permitir que cada lector pueda juzgar si las tesis centrales conservan (o no) alguna validez. Aprovecho también la ocasión para agradecer muy especialmente la generosidad de Giorgio Boccardo, Carlos Correa, Joaquín Fernandois y Sol Serrano, que escribieron los espléndidos comentarios que acompañan esta edición. Y, por último, agradezco también a Tajamar y al Instituto de Estudios de la Sociedad por haber creído que este texto merecía una segunda vida. Desde luego, todos los errores y omisiones son de exclusiva responsabilidad del autor.